plaza pública para la edición del 8 de septiembre de 1992
% Pablo Molinet
% Amparo contra arbitrariedad
miguel ángel granados chapa

Un juez federal (el segundo de distrito en el estado de Guanajuato) consideró que Pablo Molinet, un muchacho de 17 años acusado de asesinar a su sirvienta, no tiene responsabilidad en ese delito, "pues de las constancias de autos no se advierte que el quejoso haya tenido intervención en el delito que se le atribuye". Por lo tanto, le concedió amparo contra el auto de formal prisión que lo mantiene injustamente encarcelado desde el 24 de marzo anterior. El juez penal que por aquéllas fechas dictó ese insostenible documento, se inconformó con esa resolución de la justicia federal, que le enrostrara el que "no existen indicios o sospechas que hagan presumir, racionalmente, que el quejoso ejecutó la conducta típica", y pidió la revisión. Se espera que ésta sea desahogada pronto, y que a virtud de ella, Molinet salga libre, quizá antes de cumplir medio año en prisión.

Molinet encontró en la cocina de su casa el cadáver de la sirvienta María Guadalupe Díaz Zavala. Avisó a su madre, quien poco después llegó a la casa en compañía de una amiga, y entonces llamaron a la policía. Diez minutos después, agentes judiciales locales y federales llegaron en tropel, acompañados por reporteros que dieron en hablar de un "crimen satánico". La principal evidencia de que esta era la índole del homicidio era la breve biblioteca de Molinet, que fue detenido y sometido a juicio. El Procurador de Justicia del Estado, el ex diputado panista Juan Miguel Alcántara, tomó a pecho el asunto, acaso por necesidad de justificar su presencia en ese cargo, en que no había cumplido ofrecimientos justicieros formulados a su arribo a la función.

En mayo pasado, dos entregas de la *Plaza pública* fueron dedicadas al grave asunto. En una se expusieron las razones de la familia, y por ende de la defensa, que desplegaron la evidencia de que se incriminaba falazmente a Molinet. En la segunda se dio lugar a la respuesta del Procurador, que argumentó contra la acusación de que el muchacho fue torturado.

En el curso de esos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibió una instancia para ocuparse del caso, no se ha manifestado sobre el particular. En el capítulo IV, se enumeran los de Pablo que han sido conculcados. El silencio de la Comisión ha causado no sólo los efectos de una omisión, sino que en su momento fue aprovechado por el Procurador para hacer suponer que se le había encontrado carente de responsabilidad en la violación

de esos derechos. Actuó con mayor celeridad la justicia federal, que otorgó el amparo en los términos señalados. El juez penal que dictó el auto de formal prisión pasó de Salamanca a la capital de Guanajuato, esperamos que no por merecimientos como el evidenciado en ese auto, que no hizo más que prolongar el arbitrario proceder del ministerio público.

Si no fue Molinet, como el juez federal cree, el autor del homicidio, hace falta encauzar las averiguaciones hacia pistas no desarrolladas por la primera indagación. Los familiares de Pablo piensan que es posible atribuirlo a dos o más personas que tengan conocimiento de cómo se realiza en los rastros la matanza de animales, pues el sacrificio de la sirvienta sólo pudo ser cometido con fuerza descomunal y destreza profesional, o con el concurso de dos o más personas.

Al rendir su informe anual, el gobernador Carlos Medina Plascencia reveló la presunta comisión de delitos contra el patrimonio estatal, cometidos en la administración anterior. La salud pública demanda que la averiguación del caso, en sus varias vertientes, se finque en una escrupulosa observancia de la ley, y la actitud del ministerio público ante el escandaloso caso Molinet no ayuda a que el público se forme un alto concepto de la procuración de justicia en esa entidad. Si bien el amparo es contra la acción de un juez, éste llegó a su endeble convicción a causa de los elementos que le ofreció la averiguación previa, llevada al cabo por el ministerio público.

Esperemos que el tribunal colegiado, al ocuparse de la revisión, concuerde con el sensato criterio de su inferior.

PLAZA PÚBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

Pablo Molinet

Amparo contra arbitrariedad

Un juez federal (el segundo de distrito en el estado de Guanajuato) consideró que Pablo Molinet, un muchacho de 17 años acusado de asesinar a su sirvienta, no tiene responsabilidad en ese delito, “pues de las constancias de autos no se advierte que el quejoso haya

tenido intervención en el delito que se le atribuye". Por lo tanto, le concedió amparo contra el auto de formal prisión que lo mantiene injustamente encarcelado desde el 24 de marzo anterior. El juez penal que por aquellas fechas dictó ese insostenible documento, se inconformó con esa resolución de la justicia federal, que le enrostrara el que "no existen indicios o sospechas que hagan presumir, racionalmente, que el quejoso ejecutó la conducta típica", y pidió la revisión. Se espera que ésta sea desahogada pronto, y que a virtud de ella, Molinet salga libre, quizá antes de cumplir medio año en prisión.

Molinet encontró en la cocina de su casa el cadáver de la sirvienta María Guadalupe Díaz Zavala. Avisó a su madre, quien poco después llegó a la casa en compañía de una amiga, y entonces llamaron a la policía. Diez minutos después, agentes judiciales locales y

federales llegaron en tropel, acompañados por reporteros que dieron en hablar de un "crimen satánico". La principal evidencia de que ésta era la índole del homicidio era la breve biblioteca de Molinet, que fue detenido y sometido a juicio. El procurador de Justicia del estado, el ex diputado panista Juan Miguel Alcántara, tomó a pecho el asunto, acaso por necesidad de justificar su presencia en ese cargo, en que no había cumplido ofrecimientos justicieros formulados a su arribo a la función.

En mayo pasado, dos entregas de la *Plaza Pública* fueron dedicadas al grave asunto. En una se expusieron las razones de la familia, y por ende de la defensa, que desplegaron la evidencia de que se incriminaba falazmente a Molinet. En la segunda se dio lugar a la respuesta del procurador, que argumentó contra la acusación de que el muchacho fue torturado.

En el curso de esos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que re-

cibió una instancia para ocuparse del caso, no se ha manifestado sobre el particular. En el capítulo IV, se enumeran los de Pablo que han sido conculcados. El silencio de la Comisión ha causado no sólo los efectos de una omisión, sino que en su momento fue aprovechado por el procurador para hacer suponer que se le había encontrado carente de responsabilidad en la violación de esos derechos. Actuó con mayor celeridad la justicia federal, que otorgó el amparo en los términos señalados. El juez penal que dictó el auto de formal prisión pasó de Salamanca a la capital de Guanajuato, esperamos que no por merecimientos como el evidenciado en ese auto, que no hizo más que prolongar el arbitrario proceder del Ministerio Público.

Si no fue Molinet, como el juez federal cree, el autor del homicidio, hace falta encauzar las averiguaciones hacia pistas no desarrolladas por la primera indagación. Los familiares de Pablo piensan que es posible atribuirlo a dos o más per-

sonas que tengan conocimiento de cómo se realiza en los rastros la matanza de animales, pues el sacrificio de la sirvienta sólo pudo ser cometido con fuerza descomunal y destreza profesional, o con el concurso de dos o más personas.

Al rendir su informe anual, el gobernador Carlos Medina Plascencia reveló la presunta comisión de delitos contra el patrimonio estatal, cometidos en la administración anterior. La salud pública demanda que la averiguación del caso, en sus varias vertientes, se finque en una escrupulosa observancia de la ley, y la actitud del Ministerio Público ante el escandaloso caso Molinet no ayuda a que el público se forme un alto concepto de la procuración de justicia en esa entidad. Si bien el amparo es contra la acción de un juez, éste llegó a su endeble convicción a causa de los elementos que le ofreció la averiguación previa, llevada al cabo por el Ministerio Público.

Esperamos que el tribunal colegiado, al ocuparse de la revisión, concuerde con el sensato criterio de su inferior.